

Historia general e historia del Ejército *Esbozo de algunos estudios de caso* *desde una perspectiva no especialista*

DEMETRIO CASTRO ALFÍN*

I

Un historiador es, antes que nada, alguien que por oficio o afición se interesa por registrar los cambios que las diferentes manifestaciones de la actividad humana experimentan con el paso del tiempo, así como por analizar las causas de esos cambios, qué puede motivarlos y cuáles puedan ser sus consecuencias. También, y más simplemente, el historiador es alguien capaz de medir los efectos del paso del tiempo, juzgar a partir de distintos testimonios materiales o documentales en que se diferencia su propia sociedad, la de su momento, de las del pasado. Y finalmente, el historiador es el encargado de dejar constancia de esos cambios, de facilitar a otros hombres afanados en otros menesteres los testimonios que puedan servirles para cobrar conciencia de cómo han llegado a ser lo que son. El historiador, es, pues, descubridor y en cierto modo también custodio del pasado. Hubo una época en que los historiadores se creyeron capaces de establecer con seguridad e imparcialidad «lo que verdaderamente ocurrió», pero hace tiempo que la consideración de las complejidades epistemológicas propias de la historia, la conciencia de lo siempre fragmentario de la documentación; también la incertidumbre que sobre qué sea la verdad caracteriza a la ciencia contemporánea, en suma, un conjunto de razones diferentes pero conectadas, llevó a abandonar tan pretencioso intento.

Sea como fuera y como quiera que conciban su labor, los historiadores han desarrollado a lo largo del siglo XX, y en especial en su segunda mitad,

* Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales.

una compleja gama de metodologías y recursos teóricos y prácticos para conocer del mejor modo posible cómo fue el pasado. En términos generales las directrices por las que se ha regido la historia en este siglo se han orientado en un doble sentido: centrar el interés en los fenómenos colectivos, en aquellos en los cuales no hay identidades individuales diferenciables, de forma que la historiografía de este siglo, o la mayor parte de ella, ha desterrado al individuo de su campo de atención, o en el mejor de los casos le ha relegado a espacio marginal y accesorio. En contra de la vieja tradición de matriz moralista, la Historia no ha sido para sus más cultivadores el registro de los grandes hombres, de los modelos y arquetipos humanos en los que mirarse. Éste es, sin duda, un rasgo propio de la historiografía de nuestro siglo, y por lo demás bien conocido. No menos lo es el segundo, o sea, la propensión de los historiadores a privilegiar el proceso frente al hecho, la duración frente al momento, lo general de la continuidad (aunque la continuidad anuncie el cambio) frente a lo singular del momento diferenciado, original e inusitado, y como tal irrepetible. Es decir, los historiadores han querido ser conocedores de constantes más que recapituladores de sucesos. Y por la suma de las dos características mencionadas toda una concepción de la historia, consagrada a los individuos descollantes y los acontecimientos sobresalientes por extraordinarios, hubo de quedar postergada y, con toda seguridad, definitivamente superada.

Partiendo de esos planteamientos, no es difícil entender el relegamiento que la historia militar ha experimentado durante décadas entre la generalidad de los historiadores. En su concepción convencional y tópica, esa modalidad era la historia de las batallas y los generales —es decir, de personajes y acontecimientos—, pero era también una de las piezas centrales de la historia a secas (que tenía que ser política): del estudio de los conflictos de poder entre Estados que acaban dirimiéndose en la guerra.

Estas divagaciones preliminares sobre bien sabidas características de la historiografía de nuestro siglo vienen al caso sólo para hacer presente la incertidumbre que asalta a un historiador de formación general frente a la historia militar. En efecto, esta especialidad reúne muchos de los requisitos para ser desatendida por quienes se inspiran en aquellas directrices que acabo de resumir. Incluso, es literalmente desconocida para la inmensa mayor parte de los no escasos estudiosos de la historia que hoy existen en nuestro país, y no por eso dejan de ser, tantos de ellos, excelentes historiadores.

Pero parece evidente que no hay historia general posible sin dar cuenta de la dimensión bélica del pasado. Sir Walter Raleigh, cortesano y favorito de Isabel I de Inglaterra, hombre que conoció la guerra por mar y tierra, en Europa y en América, pasó muchos de los últimos años de su vida, a comienzos del siglo XVII, prisionero en la Torre de Londres. Allí comenzó una *Historia del mundo* de la que sólo pudo concluir los primeros capítulos, y que

se abre con una afirmación categórica en torno a esta cuestión: «La guerra es el tema y asunto habitual de la historia.» Podría objetarse que en su época un soldado aventurero e historiador aficionado no podría ver las cosas de otra manera, y que ha sido precisamente esa manera de verlas lo que la historiografía de nuestro siglo ha refutado. Pero aunque la historia tenga hoy otros muchos asuntos, el de la guerra sigue contándose entre los de mayor enjundia. Hace no mucho escribía un buen especialista británico, Michel Howard, que «difícilmente podría ni el historiador de más pacífica predisposición, describir el curso de los acontecimientos del siglo xx en Europa sin valerse de algunas de las herramientas del historiador militar o del análisis estratégico»¹; y no parece fácil rebatirlo. De igual manera, y en nuestra historia nacional, sería pura ficción una historia del siglo xix, por ejemplo, ignorando el protagonismo militar. No ya en la estricta dimensión polemológica —de por sí tan ineludible en un período que se abrió con las guerras de la Convención y terminó con las campañas del 98—, sino en la multiplicidad de esferas —políticas, sociales, económicas, intelectuales—, en las que los militares se hicieron presentes y determinaron la vida colectiva. Se podría argumentar que eso no es ya historia militar, aunque es probable que se hiciera desde la concepción estrecha de la historia militar en la que se la confunde con sus ciencias auxiliares o especialidades más peculiares, y desde un planteamiento en el que se contemplan los fenómenos militares como segregados del conjunto de la vida social, como una realidad ajena y con dinámica (o quizá mejor, estática) propia que sólo ocasionalmente se interfiere en la vida de los grupos sociales. Se desconoce así que la historia militar, con cierto retraso, ha experimentado una evolución análoga a la del conjunto de las ciencias históricas en el sentido de haberse «socializado», es decir, haber encontrado en los fenómenos y sujetos colectivos, y no individuales, en los procesos y no en los acontecimientos, las claves explicativas. No es cuestión de detallar ahora este asunto; baste recordar, simplemente, la importancia del giro que la especialidad experimentó a lo largo de la década de 1960, cuando proliferaron los estudios que solían incluir en su título la expresión «guerra y sociedad». Expresión que era síntesis de todo un programa de investigación y cuyo consagración se plasmaría en la notable *Fontana History of European War and Society* donde las aportaciones de Kiernan, Hale o Geoffrey Best, por ejemplo, pusieron de manifiesto el alcance de los nuevos enfoques. Por lo demás, esta concepción de la historia militar integrada en los distintos aspectos de la vida colectiva del pasado, auxiliada e inspirada,

¹ Michel Howard, «Patriotism: a dead end. The point of wars for people who fight them», en *The Times Literary Supplement*, 6, enero de 1985, 5. Howard es coeditor con George J. Andreopoulos y Mark R. Shulman de *The laws of war. Constraints on warfare in the Western world*, New Haven y Londres, Yale University Press, 1995.

como otras especialidades historiográficas, por las ciencias sociales y del comportamiento viene conociendo desde casi dos décadas un progresivo afianzamiento y expansión académica especialmente notable en los Estados Unidos².

Probablemente, uno de los aspectos más interesantes de esa renovación haya consistido en ampliar el marco de los contenidos e intereses de la historia militar. En 1932, en un libro notable por múltiples conceptos —*Índole y método de la historia militar moderna*— cifraba su autor, Fernando de Ahumada, en dos las peculiaridades de esta especialidad. Por una parte, su índole específicamente técnica, su condición de saber particular entre los propios del especialista, es decir, el militar. En segundo lugar, y como consecuencia de eso, su carácter pragmático o utilitario, su aplicación en la enseñanza de cómo hacer la guerra. Sin duda, esas razones y esa orientación de la historia de la guerra tienen su razón de ser en las Academias y Escuelas militares, pero su renovación y lo que ha permitido incorporarla a las tendencias dominantes en el quehacer historiográfico característico de este siglo, y al que antes me refería, ha entrañado una ampliación de horizontes en cuya virtud también los legos en estrategia y táctica puedan acercarse a los aspectos del pasado en los que los ejércitos, quienes a ellos pertenecían y quienes los mandaban, fueron pieza central.

Es ésta la perspectiva desde la que se abordan aquí, a modo de ensayo exploratorio, tres cuestiones que en conjunto se vinculan al proceso de cambio del Antiguo Régimen al sistema liberal en nuestro país, vistas como elementos de referencia para una aproximación, puramente preliminar, al análisis de la relación Ejército-sociedad. Parte esencial del proceso de cambio al sistema liberal es el amplio ciclo bélico que se extiende desde la Guerra con la Convención francesa iniciada en 1793 hasta por lo menos la conclusión de la primera Guerra Civil en 1840. Medio siglo, por tanto, de actividad militar en el que se sucederían entre los dos conflictos aludidos, la guerra con Inglaterra en alianza con el Directorio y el Consulado de Francia, la entablada con Portugal en 1801, la de la Independencia, los enfrentamientos civiles con las partidas realistas rebeldes y con los ejércitos de intervención de la Santa Alianza durante el Trienio Constitucional, la de los agraviados y las campañas americanas. Conflictos todos de distinto alcance y dimensiones pero que implicaron a muchos miles de hombres movilizados, afectaron de modo directo y amplio a la población civil y, en definitiva, hicieron de la guerra algo habitual en la experiencia de dos generaciones, al tiempo que situaban al Ejército y a los militares en el centro de la vida colectiva del país durante buena parte de toda la centuria.

² Puede verse un resumen panorámico en Cristina Borreguero, «Nuevas perspectivas para la historia militar», *Hispania*, LIV/1, n.º 186, 1994, 145-77.

II

En este marco, la guerra de 1793 a 1795, la Guerra de la Convención, tiene perfiles muy desdibujados. Es lógico que así sea; no sólo la lucha con Francia a partir de 1808 eclipsa aquella primera, sino que la ausencia de objetivos políticos bien definidos, de planes de campaña metódicos, de recursos y fuerzas, así como un contexto político fluido y complicado, harían de aquella guerra, pese a sus prometedores comienzos, una experiencia por completo ingrata. No quiere esto decir que sea aquél un conflicto mal conocido en sus líneas generales o poco atendido por la investigación; antes al contrario, bien acreditado es el amplio estudio que el Estado Mayor del Ejército publicó entre 1949 y 1959 y no es poca la atención que se le dedica en obras de conjunto (destacando entre ellas la amplia exposición de Carlos Seco en el tomo trigésimo primero de la *Historia de España* de Menéndez Pidal), o la reciente monografía de Jean René Aymés³. También la intervención en el campo de batalla de relevantes personalidades como Ricardos al frente del ejército oriental o de Morla como su Cuartel Maestro General determinan la familiaridad con aquellas campañas, al menos para los expertos. Por lo general se tiende a ver en aquel conflicto una primera y muy imperfecta manifestación de rasgos que luego serían propios de la guerra de 1808 a 1814; y ciertamente, juzgando su contexto global es difícil sustraerse a la impresión de que aquellos acontecimientos fueran algo más que un preámbulo de la Guerra de la Independencia. Aunque así sea en ciertos aspectos, bien vale la pena considerar esa guerra en sí misma.

En tal sentido, una primera constatación es que se trató, plenamente, de una guerra «moderna». Aunque entre los factores que pudieron determinar su declaración no quepa dejar de contar en cierta medida con los intereses o compromisos dinásticos, en tanto que su precipitante pudo ser la ejecución de Luis XVI y el sentido de lealtad familiar de los Borbones españoles. Tampoco estuvieron ausentes los afanes de expansión territorial, aunque no explícitos ni plasmados en planes concretos, en ninguna de las dos partes, y si ése es un contenido común en casi toda guerra, solía ser el primero en las del Antiguo Régimen. Pero en la que ahora nos ocupa, pese a la acumulación de esos dos elementos, el contexto bélico general es claramente distinto y se dejaría ver claramente esa diferencia representada por la irrupción del ejército patriótico francés. En efecto, se trató de un conflicto al que cabe llamar moderno en la medida en que su objetivo central, para ambas partes, era producir un cambio en la situación interna, o más precisamente, en el régimen político del país enemigo. De ahí que el atacante quiere hacerse ver por parte de la población cuyo territorio invade, más que como hasta entonces había sido lo

³ *La guerra de España contra la Revolución Francesa, 1793-1795*, Alicante, 1991.

común, es decir como reparador de una ofensa o restaurador de un derecho conculcado y, en último extremo, como defensor de una causa propia (cuando no meramente como fuerza destructiva), sino como agente benéfico y desinteresado, como liberador, bien de la tiranía en un caso, bien del caos y la impiedad en otro. Así, los ejércitos españoles buscaban restablecer la monarquía absoluta y reintegrarla a la casa de Borbón; los franceses acabar con la monarquía de Carlos IV y el orden político que coronaba, en su modo de ver, una mixtura de fanatismo clerical y de despotismo político a la turca. En este sentido, el conflicto tuvo una dimensión ideológica de primer orden, de suerte que el ideológico fue un frente más, y muy activo, de la guerra. Como en los restantes la iniciativa la llevaron los franceses. Sus imprentas produjeron una multitud de pasquines, proclamas y folletos, de los que el más célebre sería el *Avis aux Espagnols* de Condorcet, y que en conjunto constituyen una aplicación a gran escala y en ciertos casos *manu militari* de las actividades que ya meses antes de la declaración de guerra realizaban desde Bayona emigrados españoles como José Marchewa o el antiguo oficial de Artillería Miguel Rubín de Célis.

Hay razones para pensar que la efectividad y alcance de esos textos entre la población civil y las tropas españolas era menor de lo que sus autores esperaban y querían suponer; pero que su efecto llegó a preocupar a los responsables militares y políticos está fuera de duda. El conde de la Unión, sustituto de Ricardos al frente de las operaciones, se lamentaba en una comunicación oficial a Godoy de que el enemigo hacía la guerra más con la pluma que con la espada, y un anónimo panfletista español, uada contento con el curso de los acontecimientos, escribía, por su parte: «Los franceses hacen la guerra de opinión y ésta es más temible que con las armas.»

La misma expresión «guerra de opinión» que tan natural parece en pluma de este autor era, sin embargo, una novedad conceptual, reflejo semántico de un fenómeno nuevo. La presencia en los ejércitos franceses de un auténtico comisariado político ejercido por los representantes en millón día a las armas de la República, en este terreno, una capacidad de iniciativa y una efectividad en principio que en el futuro país se estuvo muy lejos de alcanzar. De hecho, ese conflicto fue ensi género a la función militar y lo asumió el elemento civil, y en particular el estamento clerical. En las pasturas y hornillas mostraron sólo a medias aptitud suficiente para contraponerse al movimiento revolucionario y en el mismo frente al. El lema al principio de la guerra, *un o, si o no*, célebre escrito de fray Diego de Cádiz, *El soldado católico en la guerra de religión*, adelantaron argumentos esgrimidos en los contendidos ideológicos de las décadas siguientes. Pero sin entrar en la cuestión de los contenidos, y relevando tan sólo el dato de que los argumentos de carácter religioso se convirtieron en el núcleo central de la contra-propaganda española, no cabe duda de su virtualidad movilizador o al menos motivadora.

Lo suficientemente motivadora como para descubrir un segundo rasgo



Vista general del Salón de Reinos.

del carácter moderno de aquella guerra, el de la movilización general. Las versiones oficiales y también la historiografía han subrayado el clima de entusiasmo patriótico con que se acogió en España la declaración de guerra, la afluencia masiva y vibrante de voluntarios, el generoso desprendimiento con que, en forma de donativos y contribuciones, quisieron sumarse los que no estaban en condiciones de tomar las armas. Probablemente se deban acoger con cierta cautela esas noticias, pero no se puede poner en duda, en todo caso, lo que la guerra tuvo de movilización general. Es decir, que en la lucha no tomaron parte sólo y en exclusiva los militares profesionales o los soldados, sino otros elementos y grupos sociales ajenos a esa condición, y, dicho sea de paso, se construiría con ello otro de los argumentos de la propaganda, el que presentaba la imagen del pueblo unido, actuando acorde con el mismo objetivo. Eso, además, revelaría otro de los rasgos que aun siendo propios de toda guerra, en aquella se acentuaría como anuncio de algo tan característico de las del porvenir, la hostilidad directa contra los discrepantes y los irresolutos, la identificación con el enemigo de cuantos pensarán como él, cuantos compartieran incluso parcialmente su ideario, aunque estuvieran lejos de coincidir en sus propósitos bélicos y menos auxiliarlos.

Pero es otro el aspecto sobre el que vale la pena llamar la atención, el de la movilización general. Lo que hace que se sumen a la lucha combatientes que no se encuadran en las unidades regulares y cuya contribución acaba por ser eficaz y valiosa, es decir, la guerrilla. Ese sistema de enrolamiento y lucha tan celebrado con ocasión de la guerra iniciada en 1808 tuvo su primer ensayo en la contienda de 1793 a 1795. Las unidades de migueletes o somatcnes serían la base de las partidas, en cuya ordenación e incluso mando participaron activamente los eclesiásticos, augurando las figuras que tanta fama conocerían tres lustros más tarde.

Hay un último aspecto indicativo del carácter general de la movilización sobre el que conviene reparar: la participación femenina. No hay que recordar que la implicación directa de las mujeres en las acciones militares o en las actividades de cooperación directa corre paralela al desarrollo del período contemporáneo. Buena confirmación de ello puede ser la sala de heroínas del Museo del Ejército, donde, con las excepciones de Catalina de Erauso o María Pita, todas las demás se distinguieron en acciones de guerra de los siglos XIX y XX, es decir, aquellas caracterizadas por los rasgos que pretendemos subrayar en la de 1793 a 1795. Y es que fue precisamente entonces cuando se hizo patente el surgimiento del nuevo prototipo: la mujer que asume en la guerra un papel más activo que el de las devociones y plegarias. Algo que no mucho antes se hubiera considerado una escabrosa extravagancia se celebraría con ocasión de la guerra en escritos y escenarios; así se estrenó en Barcelona una pieza titulada *La dama soldado* que ensalzaba la marcialidad femenina. Pero hubo algo más que ficción, y grabados y periódicos difundieron la imagen y conducta de una mujer, a quien, sin embargo, se identificó simple-

mente como «la mujer de José Díaz» (es decir, como alguien cuya identidad dependía del varón y no de sí misma), por haberse distinguido en una de las acciones libradas al otro lado de la raya de Francia por fuerzas procedentes de Pamplona, el 13 de julio de 1793, auxiliando a los heridos, entre los que se contó su marido, atendiendo a los combatientes y suministrando municiones.

Aun tan sintéticamente expuestas, estas peculiaridades y características identifican suficientemente el carácter moderno de aquella guerra. Pero sería equivocado verla sólo bajo ese prisma, desconociendo la concurrencia en ella de elementos también propios de épocas en trance de superación. Fue igualmente, en este sentido, una guerra entablada bajo antiguos moldes como por ejemplo el protagonismo nobiliario. Guarda el Museo en una de sus salas un buen testimonio de ello: una representación en formación de revista del regimiento levantado a sus expensas por un aristócrata. Una iniciativa que está a caballo entre las nuevas formas de guerra patriótica, en la que los particulares ponen en juego sus recursos en aras del interés común y nacional, y de los viejos usos nobiliarios de acudir al frente de los vasallos propios para nutrir el ejército real.

III

La Guerra de la Independencia trajo consigo cambios en los usos militares y en la concepción del ejército que sería tan difícil como vano querer resumir ahora. Se trata, sin duda, de una de las cuestiones más atendidas por nuestra historiografía militar en cualquiera de sus orientaciones. Pero hay un capítulo, relativo a sus secuelas, sobre el que quizá valga la pena parar mientes. Me refiero al grupo de militares de profesión, en especial generales y jefes, que juraron a José Bonaparte y perseveraron en la lealtad al rey que la mayoría reputó intruso, siguiéndole hasta el exilio.

Como al conjunto de los afrancesados, en su mayoría eclesiásticos y empleados gubernativos, no se puede atribuir a los militares josefinos perfil personal, convicciones políticas o comportamientos homogéneos. Junto a hombres que actuaron al dictado de su conciencia, y violentando a veces conveniencias personales, hubo meros oportunistas y otros simplemente arrastrados por los acontecimientos. En todo caso, es notoria la presencia militar en el entorno de José Bonaparte. Azanza y O'Fárrill son los nombres más conocidos y señeros de aquel grupo, pero podrían mencionarse otros no menos célebres como Rafael Blasco o el propio Morla, veterano como O'Fárrill de la Guerra con la Convención. No es de sorprender, pues, que en la retirada de Vitoria siguieran al rey intruso hasta Francia unos tres mil individuos de los ejércitos, es decir, aproximadamente un 25% del total de los extrañados. La mitad de esos hombres eran de tropa y suboficiales, en no pocos casos obligados por sus mandos a seguirles a Francia y permanecer allí; hubo

también un pequeño grupo de comisarios de guerra y ordenadores. El resto eran oficiales y jefes, contándose una quincena de coroneles y otros tantos generales y mariscales, con al menos un teniente general, el duque de Mahón, del personal de la Casa del rey.

Su suerte en el exilio fue muy distinta. Sólo unos cuantos, con recursos y relaciones, los que habían desempeñado puestos de primera fila en el gobierno o la diplomacia, pudieron establecerse en París y fueron admitidos por los círculos oficiales del régimen restaurado. La gran mayoría quedó confinada en depósitos o aislada en pequeñas poblaciones, sosteniéndose con mínimos subsidios que pagaba el gobierno francés, vigilados por las autoridades y vistos con recelo por la población. Muy pocos consiguieron volver a España, acogiéndose a perdones otorgados por Fernando VII. La gran mayoría de los restantes, temerosos de represalias y de las comisiones de depuración, no pudo hacerlo hasta el restablecimiento del sistema liberal en 1820, y no fueron pocos, en especial entre los altos mandos, los que se quedaron en Francia de por vida. La documentación que sobre las actividades y circunstancias de estos extrañados queda ofrece testimonios sobrados de la tragedia de toda emigración política, y en especial sobre su desamparo material que puso a muchos oficiales o a sus viudas en situaciones de auténtica miseria. Quizá eso y no sólo la identificación ideológica llevó a algunos, como al teniente Fernando Rubín de Célis, hermano del propagandista revolucionario de 1792 que antes mencionábamos, a incorporarse a las fuerzas reunidas por Napoleón en los Cien Días, complicando así la situación de los demás.

De entre los más conspicuos exiliados cabe destacar al marqués de Sotelo, Francisco Amorós y Ondeano, quien en los últimos días del reinado de Carlos IV había empezado a labrarse cierta reputación de hombre innovador, consagrada con la apertura en 1806 del Instituto Real Pestalozzi de Madrid, el primer centro europeo para la enseñanza de la educación física —anterior en varios años a los establecidos en Alemania por Jahn y Ling y probablemente el primer centro militar de gimnasia. Godoista de pro, Amorós fue después diputado en Bayona y consejero de Estado con José I sirviendo a su régimen con un celo interesado, especialmente en el ministerio de la Policía, que le valió ciertas reservas por parte de sus correligionarios. Llegado a Francia, se apresuró a publicar una Representación a Fernando VII justificando su conducta y quejándose de la persecución a que, según decía, estaba sometida su mujer por parte del Capitán General de Castilla la Nueva. Pese a su extensión, el escrito de Amorós, uno de los más tempranos de su género, carece de originalidad. Justifica el acatamiento del régimen bonapartista como única posibilidad de contener el desorden y garantizar la continuidad del Estado, argumentos muy próximos a los esgrimidos por Morla ya en 1809, de suerte que, en sus propias palabras, sólo bajo aquel régimen «se conocía el imperio de las leyes y la hidra de la anarquía estaba refrenada».

Amorós, quien tendría al llegar a Francia más de cincuenta y cinco años,

protagonizó a poco de hacerlo un sonoro incidente al someter a indecoroso cortejo a la hija del general Domingo Badía confiada a su tutela. Aquello debió de distanciarle de buena parte de los emigrados y en 1817 ya se había naturalizado francés y se relacionaba sólo con un pequeño círculo de españoles. Sus relaciones francesas eran, en cambio, selectas y amplias contándose entre ellas figuras sobresalientes del grupo de los ideólogos, como Volney; plenamente impregnado de la cultura francesa e integrado en la vida de aquel país viviría en París hasta su muerte dos décadas más tarde.

La doble condición de Amorós como militar y gimnasta se conjugaría en sus actividades de aquellos años, al dedicarse al fomento de la cultura física, introduciendo su práctica en el Ejército francés. De él arranca la tradición que se identificaría con la escuela militar de Joinville-Le-Pont, ya en la generación siguiente. No sería fácil calcular hasta qué punto el alejamiento de Amorós pudo influir en lo escaso de la atención prestada en la preparación física en los planes de nuestros centros de estudios militares durante el siglo XIX. Recuérdese que en el Colegio General Militar, abierto en los años de la primera mitad de siglo, la gimnasia se practicaba sólo en uno de los seis semestres lectivos, mientras que en la Academia General Militar en las últimas décadas de la centuria se incluía sólo en el primer semestre alternando con instrucción práctica.

Pero ésa sería, desde luego, de las consecuencias menores derivadas de lo que significó el exilio de aquel grupo de militares, los que antepusieron la lealtad al soberano, sin cuestionarse su origen, a la nueva legitimidad nacional consagrada desde 1808. La de los afrancesados es la primera de las emigraciones políticas de nuestra historia contemporánea, primera de una serie a la cual darían continuidad inmediata los liberales. El peso del elemento militar en esos sucesivos extrañamientos, sean afrancesados, liberales o carlistas, y más avanzado el siglo, moderados y progresistas, revela elocuentemente lo profundo de la implicación del mundo castrense en la política de la época. Poco tiene de nuevo esa apreciación, pero a alguno de sus aspectos merece la pena hacer referencia particular.

Puede decirse que disponemos hoy de un conocimiento aceptable de la estructura social y profesional, así como de las circunstancias del intervencionismo político del Ejército durante el siglo XIX. Autores como Payne, Christiansen, Headrick, Alonso Baquer, Fernández Bastarache o Cepeda Gómez lo han hecho posible. Así, pueden darse por sentadas cosas como que pese al continuado protagonismo del elemento castrense durante los tres primeros cuartos de la centuria no se puede hablar de *militarismo* en relación a aquella sociedad, donde, ciertamente, ni las prioridades políticas estuvieron determinadas por el Ejército en razón de intereses bélicos o propios, ni las instituciones militares suplantaron a las civiles, ni los valores sociales dejaron de ser netamente civiles también. La intervención del Ejército en la esfera política, o el protagonismo de individuos de su jerarquía en la dirección del Estado, se

enmarcó en finalidades propiamente políticas y civiles; una forma de intervención que los especialistas prefieren llamar pretorianismo y que no fue algo exclusivo de España, aunque su expresión clásica quedara universalmente definida por un término tan español como «pronunciamiento».

Discrepan los autores sobre la explicación del porqué del pronunciamiento y de la injerencia política del estamento militar. Es probable que no haya una causa de validez general para período tan relativamente amplio; quiero decir que parece necesario hacer distinguos importantes entre el pronunciamiento antiabsolutista del reinado de Fernando VII y el fraguado por progresistas durante el Régimen de los generales. Sin ánimo de hacer mención de todas, y menos de examinarlas críticamente, bastará recordar algunas de estas explicaciones aducidas. Por ejemplo, un sector de la historiografía provisto de las categorías del materialismo dialéctico, ilustradas incluso por las observaciones respecto a España del propio Marx, sostiene que el Ejército vino a suplir la incapacidad política de una burguesía débil tanto ideológica como socialmente y que los militares estarían en condiciones de hacerlo porque, como ya aseveraba el propio Marx, desde su lejanía en el tiempo y el espacio respecto a aquello sobre lo que pontificaba, el Ejército había sido la más transformada de las instituciones del Antiguo Régimen con ocasión de la guerra antinapoleónica⁴. La investigación más solvente tiene dudas serias respecto a la realidad del tópico sobre el Ejército de extracción nobiliaria anterior a 1808 y el de extracción abrumadoramente plebeya creado con ocasión de aquella conyuntura⁵. Para mayor complejidad de este esquema explicativo, quienes lo asumen sostienen, además, que el ejército de los primeros pronunciamientos no es actor principal y que se concede a su intervención un protagonismo excesivo, que habría correspondido más bien a tramas de conjurados civiles⁶. En formas de menor complejidad teórica, algunos autores expre-

⁴ El argumento reza al modo como se halla recogido (con tortuosa sintaxis) en Roberto L. Blanco Valdés, *Rey, cortes y fuerzas armadas en los orígenes de la España liberal, 1808-1823*, Siglo XXI, Madrid, 1988, 486. Según este autor, «Es precisamente [la] inmadurez y debilidad —es decir, de ausencia de hegemonía del proyecto liberal burgués— que el intervencionismo militar debe interpretarse (...) [L]a debilidad socioestructural y politicoidiológica de la burguesía se vería compensada y reemplazada por fuerzas liberales aristocráticas», de las que el Ejército sería expresión. Sin entrar a desmenuzar lo insustancial de categorías como «proyecto liberal-burgués», sorprende la contradicción de esta interpretación con el argumento que la inspira, el texto de Marx sobre España en el que sostiene que el papel revolucionario del Ejército se debería a su profunda renovación durante la Guerra de la Independencia. Tal renovación sólo se puede entender en términos de democratización o «desaristocratización», partiendo del supuesto (sólo muy a medias real) de que el Ejército del XVIII era, por extracción e inclinación, aristocrático. ¿Cómo, entonces, un Ejército democratizado por su renovación puede representar a las «fuerzas liberales aristocráticas»?

⁵ Vid. F. Fernández Bastarreche, *El Ejército español del siglo XIX*, Siglo XXI, Madrid, 1978 y « », en *Historia de España de Menéndez Pidal*, 509.

⁶ Vid. Blanco Valdés, 1988, 479-80.

san una opinión análoga al considerar que el Ejército se vio arrastrado a la intervención política reclamado por unas clases medias débiles y acomplejadas⁷.

Otros autores sostienen explicaciones centradas en aspectos que podrían llamarse corporativos pero que pudieran ser también despecho personal. La disposición a actuar en la esfera política vendría, dada según este modo de ver, por el descontento ante el bloqueo de las expectativas de ascenso, la postergación en las recompensas⁸. Si no queremos verlo desde prisma tan subjetivo y poco verificable, cabe mencionar el espíritu puramente corporativo que contrapuso, en especial desde los años de la Guerra carlista, a militares y «abogados» como solía llamar con menosprecio Narváez a los políticos civiles.

Más sólida parece ser la interpretación que cabría llamar «estructural»⁹, según la cual la participación en labores de gobierno y administración durante el siglo XVIII y el ejercicio del poder en términos casi absolutos durante los largos años de contiendas a principios de siglo, cuando el mando alcanzaba también a materias puramente civiles, darían a los militares no sólo práctica de gobierno, sino una disposición casi natural para desempeñarlo. Algún estudioso considera que por esta vía calaría en el Ejército o entre algunos de sus más reputados jefes, una conciencia mesiánica o providencialista, el convencimiento de lo insustituible de su intervención y la certeza de incorporar en la fuerza armada la voluntad nacional en su expresión más genuina y operativa¹⁰.

Parece razonable suponer que una parte de cada una de estas razones alimentó la disposición a intervenir políticamente que caracteriza a amplios sectores de la oficialidad durante más de medio siglo. Pero quizá convenga estructurar mejor este conjunto de factores enmarcándolo en los rasgos propios del período. Al igual que las grandes revoluciones que abrieron la época contemporánea, la industrial y la liberal, la que puede llamarse «revolución militar» coetánea también se afianzó en España con dificultades particulares y a ritmo lento. En efecto, las innovaciones que durante la primera mitad del siglo XIX transformaron el armamento, los principios estratégicos, los sistemas de transporte y otros aspectos de los principales ejércitos europeos *modernizándolos* sólo se aplicaron en España con retraso y de forma parcial. Es decir, a mediados de siglo el Ejército español era débil, mal organizado y des-

⁷ José Cepeda Gómez, «El acceso de los militares al poder político (1834-1843)», en José M.^a Jover, *La Era Isabelina y el Sexenio democrático 1834-1874*, tomo XXXIV de la *Historia de España de Menéndez Pidal*, 543.

⁸ José Luis Comellas, *Los primeros pronunciamientos en España*, Madrid, 1958, 32-33. E. Christiansen, *Los orígenes del poder militar en España*, Madrid, 1974, 47. S. G. Payne, *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, 1976, 12.

⁹ R. Carr, *España, 1808-1939*, Barcelona, 1969, 131. Christiansen, 1974, 10-11.

¹⁰ Cepeda Gómez, 522, *passim*.

provisto de medios. Los profesionales no podían dejar de advertirlo, pero bastarían para hacerlo ver experiencias tan elocuentes como los quince mil muertos que costó la guerra de Santo Domingo, debidas más a las insuficiencias de la sanidad militar y la intendencia que al enemigo, o los siete mil que hubo en los meses de la campaña de Marruecos frente a fuerzas inferiores en todos los conceptos. Todo eso no podía significar para los oficiales conscientes más que la certeza de la incapacidad de la institución a la que servían. En pocas palabras, y desde el punto de vista estrictamente técnico, ni las fábricas españolas estaban en condiciones de proporcionar las nuevas armas y materiales con la calidad y cantidad requeridas, ni la política económica y comercial permitía adquirirlas fuera, ni las innovaciones en la manera de hacer la guerra podían incorporarse dando como resultado, todo ello, a la desmotivación de los oficiales más capacitados y atentos a la evolución de su oficio.

A esa falta de motivación profesional se unía otro factor que apuntaba en idéntico sentido: la política de personal seguida durante décadas. Es un hecho bien conocido, y sobre el que no hay que insistir, lo desproporcionado del organigrama del Ejército desde comienzos del siglo XIX: A finales del reinado de Fernando VII, en 1833, el Estado Mayor General incluía más de medio millar de generales, mariscales y brigadieres, y al comenzar el reinado efectivo de su hija, una década después, eran seiscientos cincuenta, los más de ellos en edad activa, manteniéndose en torno a esa cifra hasta la década de 1880. Desproporciones semejantes se registraban en las escalas de jefes y oficiales de las distintas Armas, especialmente en Infantería. En condiciones tales, la situación de cuartel o de reemplazo con media paga era el destino inexorable de más del 60% de la oficialidad y eso según decisiones que nada tenían que ver de ordinario con las exigencias del servicio o los merecimientos personales. Es decir, una carrera profesional estable, al abrigo de las incertidumbres, era punto menos que imposible. El favor político y la práctica clientelista propia de la época hacía que los destinos, ascensos y recompensas se distribuyeran según la conveniencia del momento político y los intereses entonces predominantes. En conclusión, la frustración de expectativas era un estado corriente para un parte numerosa e importante del estamento militar. A mayor abundamiento, a ese estado se unía el de *privación relativa*, el sentimiento suscitado por la comparación de la situación propia y de la consideración de los propios merecimientos con la de otros individuos del mismo grupo, en este caso del mismo grupo profesional¹¹. Los sociólogos insisten en la importancia de este estado psicosocial como fuente y motivación de actitudes y conductas de rebeldía.

Finalmente, la situación económica en sí misma era también motivo de

¹¹ En relación a la profesión militar estos aspectos se encuentran en el más conocido de los clásicos de la sociología castrense, S. Stouffer y otros, *The American Soldier*, Princeton, 1949.

inestabilidad. Ya se sabe que las partidas dedicadas al gasto militar en los presupuestos del Estado no dejaron de menguar a lo largo de las décadas centrales del XIX, y por importantes que fueran las mejoras de administración, el de la época fue siempre un ejército pobre, obligado a dedicar tres cuartas partes de sus ingresos anuales al pago de su personal. Y en este capítulo las diferencias eran muy acusadas, no ya entre los diferentes empleos, sino en función de las gratificaciones inherentes a determinados destinos y, sobre todo, entre el personal activo y el de reemplazo o cuartel. Además, las pagas no siempre se recibían con puntualidad, y entre la suboficialidad y la tropa esas deficiencias eran aún más acusadas. En suma, los incentivos económicos personales —cifrados sólo en unos haberes algo más elevados y puntuales—, eran considerables a la hora de decantarse hacia una intervención política aunque implicara quebrar las ordenanzas y asumir serios riesgos personales. No quiere eso decir que primaran sólo motivaciones de mezquino interés personal, sino que la posibilidad de vincular ese interés y la explicación de las propias desdichas a determinadas orientaciones políticas y concebir la posibilidad de cambiarlas con un golpe o amago de golpe de fuerza aparecía como una empresa digna, legítima y factible. En una cultura política altamente personalizada como fue la española de aquellas décadas, todo podía reducirse a seguir a un superior audaz. Ciertamente, sólo una minoría de la oficialidad, más politizada e involucrada en las luchas ideológicas, tomó parte en las conspiraciones y trabajos preparatorios de los pronunciamientos. No es tanto con ellos con los que pueden valer estas consideraciones, sino con los oficiales e incluso con las clases de tropa que en sus unidades o desde la situación de reemplazo y hasta reserva se les asumaban y atendían sus exhortaciones. Para ellos la lealtad política podía decidirla la garantía de mejoras en los haberes, unidas a promesas de reforma en las políticas de ascensos ligadas a generalidades sobre la regeneración nacional y la moralización que el gobierno salido del pronunciamiento se proponía implantar.

El examen de la documentación relativa a aquellos episodios es muy ilustrativa a este respecto. Baste un ejemplo: el general Prim, contumaz conspirador contra los gobiernos de la Unión Liberal en los años de 1860, hizo uno de sus más ambiciosos intentos con la sublevación de Villarejo, en enero de 1866. Al pronunciar, emitió una proclama a civiles y militares cuyo contenido giraba en torno a la idea de postración material y deshonra moral en que había puesto al país el gobierno. Pero bien significativo era el párrafo final del manifiesto. Decía así: «¡Soldados que habéis combatido a mis órdenes! Ya sabéis que jamás os he abandonado y que si me ayudáis en mi empresa, sabré conducirlos primero por el camino de la victoria, y recompensar después vuestros esfuerzos»¹². Al mismo tiempo, el ministro de la guerra que lo

¹² Servicio Histórico Militar, 2.^a-4.^a, Leg. 176. (El subrayado es mfo.)

era el propio presidente del Consejo, O'Donnell, ordenó en sus primeras disposiciones para hacer frente a la situación que se pagase a la tropa un plus de un real y cuatro a los sargentos, superior al pagado en la campaña de África¹³.

Aun tan sumariamente esbozados como aquí quedan, los asuntos a que se ha hecho referencia habrán podido ilustrar la amplitud de las cuestiones que se abren para el estudio de una historia militar renovada y vitalizada por el contacto con otras ramas de la disciplina. Acabar con el aislamiento y la relegación al mundo cerrado de los especialistas sólo puede redundar en beneficio de todos, y no menor medida de los historiadores generales. Como institución con estructuras y códigos de comportamiento específicos el ejército, en tanto objeto de estudio histórico, es un terreno de trabajo del que, a la luz de nuevos problemas y métodos, viéndolo sobre todo como uno más, tan peculiar como se quiera, de los actores sociales caben esperar excelentes resultados.

¹³ Disposiciones similares se adoptaron en circunstancias análogas producidas durante aquellos años. Con ocasión del movimiento de agosto de 1867 el Ministerio de Hacienda tuvo especial cuidado en que hubiera fondos disponibles para el pago de las tropas, «en particular en los puntos en que se hallan más atrasadas las consignaciones»; mientras el ministro de Marina recibía instrucciones de atender al pago de los haberes debidos al personal del arsenal de San Fernando, «a fin de evitar todo motivo de queja que pueda servir para que los trastornadores del orden público traten de aprovechar en favor de sus planes», S.H.M., 2.^a-4.^a, Leg. 177.